

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **YOLANDA HERRERA ARANGUREN** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A.) y **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** (en adelante COLFONDOS S.A.), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-021-2019-00404-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata la actora, que laboró para CERAMITA S.A. efectuando cotizaciones al ISS desde el 1° de enero de 1991 hasta el 30 de abril de 1995, cotizando allí 224 semanas, y que el 1° de julio de 1995 se trasladó al RAIS a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., trasladándose posteriormente el 3 de abril de 2000 a la AFP COLFONDOS S.A.

Expone que desde la fecha de traslado al RAIS ha realizado aportes al sistema de pensiones, alcanzando para el 30 de agosto de 2018 un total de 1122 semanas que

sumadas a las 224 semanas que cotizó en el RPM, lo que arroja un total de 1.346 semanas cotizadas.

Manifiesta que le solicitó a COLFONDOS S.A. la realización de un comparativo de la pensión en ambos regímenes, y que dicha AFP el 28 de mayo de 2019 le informó que a la edad de 57 años en el RAIS tendría derecho a una mesada pensional por valor de \$2.392.539. y que, a la misma edad en COLPENSIONES tendría derecho a una mesada pensional por valor de \$6.292.251

Señala que siempre confió en que la pensión que recibiría por parte de COLFONDOS S.A. estaría acorde con sus aportes y sería suficiente para cubrir su mínimo vital y el de su grupo familiar, de acuerdo con las expectativas que le fueron creadas por las administradoras privadas.

Indica que a partir del comparativo de la pensión que realizó COLFONDOS S.A. sobre la mesada pensional, considera que las administradoras privadas no le proporcionaron una suficiente, veraz, completa y clara información sobre las reales implicaciones que le conllevaría el traslado y sus consecuencias futuras, viendo defraudada su expectativa pensional, pues su mesada pensional se verá reducida en un 61.9%, de la que habría obtenido en COLPENSIONES.

Expone que el 6 de julio de 2019, presentó ante Colpensiones solicitud de traslado para el RPM, la cual le fue despachada de manera desfavorable, aduciendo que se encuentra a diez años o menos del requisito de edad para pensionarse.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de primera instancia, despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS y declarando en consecuencia que estuvo válidamente afiliada y sin solución de continuidad en el RPMPD que administra actualmente COLPENSIONES.

Así mismo, condenó a COLFONDOS S.A. a trasladar a COLPENSIONES, los saldos de la cuenta de ahorro individual de la demandante incluyendo los rendimientos financieros. Igualmente condenó a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES las cuotas de administración y las sumas del seguro previsional que fueron descontadas de los aportes de la demandante durante su afiliación en el RAIS, incluyendo los tiempos de afiliación con otras AFP.

Finalmente, declaró probada la excepción de ausencia de prueba en el consentimiento y no probadas las demás, y condenó en costas a PROTECCIÓN S.A.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A. apela parcialmente la sentencia, respecto a la orden de devolver a COLPENSIONES las comisiones de administración y el seguro previsional por el tiempo de afiliación de la demandante al RAIS, indicando que no es procedente la devolución de dichos conceptos, toda vez que se trata de comisiones ya causadas durante la administración de los dineros de la cuenta de ahorros individual de la demandante, indica que los descuentos se hicieron conforme a la Ley y como contraprestación a una buena gestión de administración como lo es legalmente permitido frente a cualquier entidad financiera.

Expone que durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a PROTECCIÓN S.A. desde el año 1995 hasta el año 2000, PROTECCIÓN S.A. administró los dineros que la demandante depositó en su cuenta de ahorros individual con la mayor diligencia y cuidado puesto que PROTECCIÓN S.A. es una entidad financiera experta en la inversión de los recursos de la propiedad de sus afiliados y prueba de ello fueron los rendimientos que generó su cuenta de ahorro individual, los cuales fueron trasladados en su momento a la AFP COLFONDOS S.A.

Indica que con la condena de primera instancia que ordena a PROTECCIÓN S.A. trasladar las cuotas de administración, y las sumas del seguro previsional se estaría constituyendo un enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES por recibir una comisión que no es destinada a financiar la pensión de vejez de la demandante y por recibir una comisión por un dinero que nunca administró.

Manifiesta que, si la consecuencia de la ineficacia de la afiliación es que las cosas vuelvan al estado anterior, se producirían unas consecuencias, como lo son que el contrato de afiliación nunca existió, que PROTECCIÓN S.A. no debió administrar los dineros de la cuenta de ahorros individual de la demandante, y que los rendimientos producidos por la cuenta no se causaron.

Indica que frente al seguro previsional, se paga mes a mes a una aseguradora por si sucede un siniestro por invalidez o sobrevivencia la entidad pague la suma adicional necesaria para financiar esas pensiones. Como ya se dijo fueron girados de manera periódica a la aseguradora y por ello PROTECCIÓN S.A. se encuentra imposibilitado para solicitar una devolución y trasladársela a COLPENSIONES, puesto que las

aseguradoras son terceros de buena fe que nada tienen que ver en el acto suscrito. Además, que ese 3% de IBC de los afiliados al sistema general de pensiones que se destina a pagar la comisión de administración y la prima del seguro provisional opera la prescripción toda vez que son conceptos que se van descontando periódicamente como lo impone la Ley y no financian la prestación económica por vejez, por lo que son conceptos que, si prescriben conforme al artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el artículo 151 del CPT y de la SS.

Finalmente, solicita al Tribunal Superior se considere el hecho de que resulta excesivo que se le ordene a PROTECCIÓN S.A. devolver las comisiones de administración por las deducciones correspondientes que se realizaron por parte de la AFP COLFONDOS S.A. desde el año 2000 hasta la fecha de la audiencia, puesto que no es dable que se le ordene devolver un concepto que jamás se ha recibido.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, ninguna de las partes, allegó escrito de alegaciones.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de PROTECCIÓN S.A., se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL 12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.

3. La carga de la prueba de demostrar que la afiliada recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente asunto, está probado, que la actora, estando afiliada al régimen pensional de prima media administrado por el extinto ISS hoy COLPENSIONES, conforme se desprende de la historias laboral que milita a folios 16 a 19 (Documento 03 del expediente digital), se afilió a la administradora del RAIS PROTECCIÓN S.A. el 28 de abril de 1995, como se anota en el formulario de afiliación a dicho fondo que milita a folio 20 del expediente, (Documento 03 del expediente digital) con efectividad al 1° de mayo de 1995, conforme se consigna en el certificado SIAFP que milita a folio 144 (documento 12 del expediente digital), trasladándose posteriormente a la AFP COLFONDOS S.A. el 3 de abril del 2000, como se anota en el formulario de afiliación a dicho fondo que milita a folio 22 del expediente, (Documento 03 del expediente judicial).

De otra parte, en este caso, si bien la demandante no es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no contar para el 1° de abril de 1994 con 35 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que la AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1995 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS.**

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:00:25 del video de la etapa de trámite (Documento 26 del expediente digital), no se advierte que además de indicar que el asesor de PROTECCIÓN S.A. le manifestó que los aportes que había hecho al ISS estaban en riesgo por la situación del ISS en ese momento, que en el fondo privado tendría unos beneficios, que podía pensionarse incluso a menor edad, y que las semanas que tenía cotizadas en el ISS iban a pasar al fondo privado, esta haya confesado que el asesor de la AFP PROTECCIÓN S.A. le hubiere brindado toda la información, completa, clara y oportuna que se requería para materializar su afiliación al RAIS, pues no se advierte que haya confesado que se le

ilustró sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son la explicación clara de las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción pre impresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probó la AFP PROTECCIÓN S.A., siendo su carga como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión del *a quo* de declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por la demandante en el año 1995 cuando se trasladó del RPM administrado por el extinto ISS a la AFP PROTECCIÓN S.A., pero por las razones expuestas en este proveído, esto es, por la ausencia de prueba en el cumplimiento del deber de información por parte de PROTECCIÓN S.A. y no por la aplicación del artículo 272 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 53 de la Constitución Política como lo adujo el fallador de primer grado.

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES y frente a las cuales el *a quo* determinó que COLFONDOS S.A. debe trasladar los saldos de la cuenta de ahorro individual de la demandante incluyendo los rendimientos financieros y que PROTECCIÓN S.A. debe trasladar a Colpensiones las cuotas de administración y las sumas del seguro previsional que fueron descontadas de los aportes del demandante durante todo el tiempo de vinculación al RAIS, incluyendo el tiempo de afiliación en otros administradoras del RAIS, encuentra la Sala que la orden impartida por el *a quo*, no se encuentra acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, dado que, si bien fue la AFP PROTECCIÓN S.A. quien al momento del traslado inicial del demandante al RAIS inobservó el deber de información, lo cierto es que no se advierte una razón legal o jurisprudencial para disponer, como lo hizo el *a quo*, que sea PROTECCIÓN S.A. quien deba asumir la devolución total de las sumas que fueron descontadas de la cotización del demandante por las demás AFP a las que este estuvo afiliado que fueron destinadas cuotas de administración y al pago de las primas de seguros previsionales de invalidez y de sobrevivientes y al fondo de garantía

de pensión mínima, pues ello acarrearía una afectación económica desproporcionada al tener que asumir sumas que nunca ingresaron a su patrimonio o que no continuó administrando cuando el actor se trasladó a COLFONDOS S.A., tal y como lo señala la apoderada de PROTECCIÓN S.A. en su recurso de alzada, generándose a su vez un enriquecimiento sin causa, no en favor de Colpensiones como se afirma en el recurso, sino en favor de COLFONDOS S.A., quien conservaría en su poder sumas que conforme la jurisprudencia y en virtud de la declaratoria de ineficacia que se confirma en esta instancia, deben ser trasladadas al RPM.

Conforme lo anterior, encuentra esta superioridad que la sentencia debe ser MODIFICADA, en el sentido de DECLARAR que la devolución que debe realizar PROTECCIÓN S.A. a COLPENSIONES deberá incluir, la totalidad de las sumas que en su momento fueron descontadas de las cotizaciones de la demandante durante su permanencia en dicha administradora del RAIS, y destinadas al pago de comisiones y gastos de administración y al fondo de garantía de pensión mínima, es decir, que deben devolverse a Colpensiones el porcentaje faltante para completar el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole.

Por su parte, COLFONDOS S.A., como actual administradora de la demandante, deberá devolver a COLPENSIONES, además de los saldos de la cuenta de ahorro individual de la demandante y los rendimientos financieros, los porcentajes descontados de las cotizaciones realizadas por el demandante durante su permanencia en dicha administradora del RAIS, es decir, el 100% de las cotizaciones realizadas por el demandante, destinados para comisiones y gastos de administración, y para el fondo de garantía de pensión mínima, es decir, el 100% del valor de las cotizaciones, con sus rendimientos financieros y sin descuento de ninguna índole.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este** y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiesen recibido tanto las AFP demandadas, como aquellas AFP con las cuales se fusionaron o absorbieron en su momento, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una*

disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás» (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”.*

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación dla actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuándo le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”

Teniendo en cuenta lo anterior, contrario a lo argumentado ampliamente por la apoderada de PROTECCIÓN S.A. en su recurso de alzada, al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe **o de una buena gestión en la administración del bien**, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de las AFP demandadas, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, que tiene como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban

asumir de su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

De otra parte, respecto de la declaratoria de prescripción de las cuotas de administración que solicita el apoderado de PROTECCIÓN S.A. en su recurso de alzada, ella no opera, toda vez que la obligación de restituirlas se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de las sentencias que la declaran, por lo que no sería procedente la prescripción de las cuotas de administración.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia consultada será CONFIRMADA, MODIFICADA y ADICIONADA en los términos anteriormente expuestos.

SIN COSTAS en esta instancia por haber salido parcialmente avante el recurso de apelación de PROTECCIÓN S.A.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de mayo de 2021 proferida por el JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **YOLANDA HERRERA ARANGUREN** contra **COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A.** y **COLFONDOS S.A.**, MODIFICÁNDOLA en el sentido de DECLARAR que PROTECCIÓN S.A. debe devolver COLPENSIONES, la

totalidad de las sumas que en su momento descontó de las cotizaciones de la demandante durante su permanencia en dicha AFP, destinadas al pago de comisiones o gastos de administración, incluidos los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima y seguros previsionales, es decir, el porcentaje faltante para completar el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole.

Por su parte, COLFONDOS S.A., como actual administradora de la demandante, deberá devolver a COLPENSIONES, además de los saldos de la cuenta de ahorro individual de la demandante y los rendimientos financieros o intereses, los porcentajes descontados de las cotizaciones realizadas por la demandante durante su permanencia en dicha administradora del RAIS, es decir, el 100% de las cotizaciones realizadas por el demandante, destinados para comisiones y gastos de administración, y para el fondo de garantía de pensión mínima, es decir, el 100% del valor de las cotizaciones, con sus rendimientos financieros y sin descuento de ninguna índole.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f82377784b61865b85fbb00b78d4c65994b9ea0174a536fb867b537403ac54c8**

Documento generado en 18/08/2022 03:23:27 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>